

MEMORIA PROPUESTA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DERIVADOS DEL DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD MENTAL DESPLAZADAS A LA COMUNIDAD DE MADRID PROVENIENTES DEL “INTERNADO DE POKROVSKIY”, CON MOTIVO DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA

La invasión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, además de amenazar y menoscabar la seguridad y la estabilidad europea y mundial, está generando graves consecuencias en todos los ámbitos, en particular en el económico y social. Pero más allá de la grave crisis económica y energética que la invasión de Ucrania está generando, sobre todo en el ámbito europeo, el efecto más devastador de la guerra es la profunda crisis humanitaria padecida por el pueblo ucraniano.

Por ello, desde la condena realizada por el Consejo Europeo, con la máxima firmeza, en sus Conclusiones de 24 de febrero de 2022, en las que hace hincapié en la grave violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que supone la invasión de Ucrania, se han sucedido las reacciones coordinadas en favor del pueblo ucraniano, en forma de sanciones al invasor y en distintas medidas de apoyo y ayuda, que son muestra de solidaridad tanto de la propia Unión Europea como de la práctica totalidad de los países de nuestro entorno.

En línea con lo expuesto, el pasado 1 de marzo, el Gobierno de la Nación aprobó una declaración institucional en solidaridad con los ciudadanos de Ucrania en la que «a la vista del actual conflicto bélico existente en Ucrania, y de los cientos de miles de personas ucranianas que están abandonando el país, el Gobierno español declara su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que se encuentren en nuestro país, como de aquellos que puedan llegar al mismo en días venideros».

En este sentido, una de las más graves consecuencias de la crisis humanitaria generada por la invasión, además obviamente de la pérdida de vidas humanas y del drama derivado de la guerra, es el ingente número de personas desplazadas como consecuencia de la guerra. Según datos recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualmente hay más de 5 millones de refugiados desplazados fuera de Ucrania. No obstante, de acuerdo con el propio ACNUR, dependiendo de cómo evolucione el conflicto, sobre la base de las estimaciones actuales, es probable que este número aumente, posiblemente hasta más de 6 millones.

Ante la eventualidad de que la Unión Europea se enfrente a un gran número de personas desplazadas a consecuencia de la guerra, muchas de las cuales es previsible que soliciten protección internacional, el pasado 4 de marzo, el Consejo en su formación de Justicia y

Asuntos de Interior (JAI) aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE con el objeto de que se ponga en marcha el mecanismo de la protección temporal.

El ámbito de aplicación de esta Decisión de ejecución ha sido además ampliado por Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo, extendiendo el mecanismo de protección temporal a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España, en coherencia con la declaración institucional citada, en la que el Gobierno no solo se comprometía a alinearse con la decisión que adoptara el Consejo de la Unión Europea en lo relativo a la posible concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, sino también a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.

En esta línea, la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como responsable de la acogida de los desplazados ucranianos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, solicita a la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias, la acogida y atención integral de las personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental procedentes del centro sanitario público “Internado para los pacientes con trastornos neuropsicológicos de Pokrovskiy”, en las residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social que han sido previamente puestas a disposición por parte de la Comunidad de Madrid para la acogida de desplazados procedentes de Ucrania, concretamente, Residencia de Mayores Gran Residencia y Residencia de Mayores Colmenar Viejo.

Forma parte del objetivo de la Agencia Madrileña de Atención Social la atención de personas con discapacidad intelectual. Para ello cuenta con personal especializado y 25 centros de gestión directa que atienden a 1.718 personas con distintos grados de afectación, 1.064 plazas en centros diurnos y 654 en residencias, de las cuales, 555 son plazas para personas con grandes necesidades de apoyo.

El número de desplazados con discapacidad intelectual o por enfermedad mental provenientes del “Internado para los pacientes con trastornos neuropsicológicos de Pokrovskiy” que acoge la Comunidad de Madrid asciende a 109. Estas personas no pueden ser alojadas en ninguno de los 5 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual gravemente afectadas adscritas a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, ya que cuentan con una alta ocupación y es preciso que por eficiencia en su atención y las obvias necesidades de comunicación se mantengan los grupos unidos. Por esta razón, se ha determinado distribuirlos entre otras residencias del organismo, dedicadas a la atención a mayores pero que pueden reconvertirse en espacios para la atención de este grupo concreto de dependientes. En concreto, se trata de un

módulo en cada una de las dos residencias indicadas anteriormente, que acababan de ser reformados, y que se dedicarán de forma independiente y en exclusiva a estos colectivos. En estas residencias se cuenta con la infraestructura necesaria para su alojamiento, con una mínima adaptación, así como con los servicios y suministros para la atención de las necesidades básicas de las personas (alimentación, higiene, limpieza, lavandería, mantenimientos, etc.).

Se ha dividido al colectivo en dos grupos, tras la oportuna valoración y asignación de los servicios de Salud Mental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De esta forma, 55 personas con trastornos mentales graves se encuentran en la Residencia de Mayores Colmenar Viejo y 54 personas con discapacidad intelectual o tipología asimilada se han instalado en la Residencia de Mayores Gran Residencia.

Ambos centros cuentan con personal suficiente para la atención indirecta (personal de cocina, hostelería, mantenimiento, administración, servicio sanitario, trabajo social, dirección, etc), y se reforzará el personal de atención directa mediante contrataciones extraordinarias eventuales. No obstante, hay que indicar que existe una diferencia entre ambos centros, ya que la unidad de discapacidad intelectual de Gran Residencia no requiere de apoyo técnico especializado, dado que la Agencia Madrileña de Atención Social es especialista en la atención a este colectivo, y desplazará o contratará personal especializado en discapacidad para esta instalación. Sin embargo, la unidad ubicada en la Residencia de Colmenar, con tipología de enfermedad mental y trastornos mentales graves, requiere, además de la atención del personal habitual de la Agencia (técnicos auxiliares, técnicos de enfermería, enfermeras, psicólogos, terapeutas, etc.), el apoyo de un servicio especializado en enfermedad mental, que la Agencia no puede prestar de inicio.

Por ello, se valora de cara a asegurar la mejor atención, estabilidad y seguridad de las 55 personas con enfermedad mental y trastornos mentales graves, la contratación de un servicio técnico especializado que lleve a cabo una intervención inicial, limitada en el tiempo, de valoración, apoyo, programación y adaptación del trabajo en la residencia a las necesidades de este colectivo, complementario a la atención directa por parte del personal de la misma. Una vez la residencia haya adquirido las destrezas para la atención a personas con enfermedad mental el apoyo técnico de este servicio especializado se irá retirando.

Para atender este servicio, para el que la Agencia Madrileña de Atención Social no dispone de recursos humanos suficientes y especializados para la atención a la enfermedad mental, se establece un presupuesto mensual estimado de **70.000 euros mensuales, IVA exento.**

La fundamentación y programación de las actividades a desarrollar serán las siguientes:

Valoración del perfil de personas a atender:

Se trata de **55 personas** con diagnósticos de **trastorno mental severo** (esquizofrenia en su mayoría) procedentes de una institución de atención a pacientes neuropsiquiátricos de la región del Dombás en Ucrania.

Organismos como el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España o la Organización Mundial de la Salud, establecen que en la atención a personas con trastorno mental grave han de brindarse siempre **intervenciones psicosociales** a la persona y sus cuidadores, especialmente en entornos no médicos.

Estas personas se encuentran además en una **situación de especial vulnerabilidad** para su salud mental debida a la extrema adversidad que supone un **contexto de guerra** en su país **y de desplazamiento forzado** de su entorno, de la atención habitual que venían recibiendo y de su red de apoyo familiar y extensa. La investigación disponible demuestra que las circunstancias adversas como en la que se encuentran es un factor de alto impacto sobre la salud mental, especialmente para las personas con condiciones psicopatológicas previas.

La complejidad de este escenario requiere de una **atención psicosocial especializada en trastorno mental severo combinada con una atención psicosocial preventiva** de la incidencia de factores de alto impacto sobre la salud mental y **del trastorno de estrés postraumático en personas con problemas de salud mental graves**.

Separados de su entorno habitual, sus rutinas, cultura, lengua y de sus cuidados y cuidadores habituales, puede esperarse en el corto y medio plazo (hasta un mes aproximadamente) un conjunto de problemáticas que vayan desde la evocación repetida del evento traumático hasta la inhibición y evitación del contacto social, la hiperactividad u otras manifestaciones físicas y cognitivas de la ansiedad (trastornos del sueño, irritabilidad,...) que acompañan habitualmente a estos procesos y que compliquen la problemática de base de estas personas.

La procedencia de estas personas y el hecho de que su lengua no sea la del país de acogida, requiere que la atención a su salud mental y su situación de especial vulnerabilidad y dependencia, desarrolle herramientas técnicas especializadas relacionadas con la atención al trastorno mental grave no únicamente verbales.

Propuesta de atención:

1. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL INDIVIDUAL

- Reestructuración cognitiva y emocional.
- Habilidades de afrontamiento.
- Prevención del Trastorno de Estrés Post Traumático.
- Prevención de crisis.

- Información y orientación sobre su situación particular.
- Intervención sobre el duelo.
- Continuidad del proyecto vital.
- Recuperación de contactos y apoyos familiares.
- Prevención del aislamiento social y estimular.

2. INTERVENCIÓN GRUPAL

- Intervención ambiental sobre estresores.
- Actividades educativas dirigidas a la preservación de la identidad personal y colectiva con perspectiva transcultural.
- Desarrollo relacional y de red de apoyo social.
- Mediación en conflictos convivenciales.
- Organización de espacios informales, colectivos, de apoyo mutuo.
- Organización de talleres para la vida diaria: ocupación significativa, ocio, cuidado personal.

3. APOYO, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PERSONAL DE LA RESIDENCIA

- En atención a personas con problemas de salud mental grave.
- En fomento de autonomía en actividades de vida cotidiana en la residencia.
- En autorregulación emocional y prevención de estrés laboral.
- En conflictos interculturales (mediación intercultural).
- En entrevista y comunicación motivacional con los residentes.
- En supervisión y manejo de casos complejos.

4. COORDINACIÓN E INFORMES

- Coordinación y enlace con la Red Sanitaria.
- Coordinación con la Red de Protección a Refugiados.
- Informes técnicos de seguimiento a la Agencia Madrileña de Atención Social.

Equipo profesional y organización

Dada la complejidad de la intervención, además de la alta especialización en intervención psicosocial en salud mental, la investigación y experiencia disponible recomiendan un equipo transversal, polivalente y no parcelado. Se **selecciona a un equipo especializado, que, además de especialización en atención psicosocial en trastorno mental severo, cuenta con competencia en intervención en crisis y emergencias, prevención del trastorno de estrés postraumático, acción comunitaria, intervención grupal y convivencial y perspectiva transcultural.**

- 1 Coordinador
- 8 técnicos de atención especializada en salud mental

RATIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL: 0,16

La duración del contrato será de tres meses, prorrogables expresamente y por periodos no superiores al mes. Según se ha expuesto anteriormente, se trata de una intervención limitada en el tiempo, de apoyo técnico en la implantación de una metodología de trabajo en los profesionales de la residencia, de cara a prestar el apoyo adecuado al colectivo de personas con enfermedad mental, sin poder determinar el tiempo que ello requerirá, aunque estimamos que un máximo de tres meses. El contrato concluirá, en todo caso, con la desaparición de la necesidad que lo motiva.

La utilización de cualquier procedimiento distinto al previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de los permitidos en la normativa de contratación pública, como el procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia regulado en el artículo 168.b).1º LCSP, o el procedimiento de urgencia recogido en el artículo 119 LCSP, no permitirían atender de forma inmediata a las necesidades descritas anteriormente.

En cualquier caso, ante la posibilidad de que la situación se prolongue indefinidamente, se procederá a la preparación de pliegos de contratación abiertos a licitación pública con el fin de adaptar el expediente a los requisitos de la LCSP.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS

Fdo.: M^a Leonor Gutiérrez Ruiz